



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO: ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE: MARIA LUZMILA URREGO OQUENDO
DEMANDADO: COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.
RADICADO: 050013105 003 2019 00567 01
ACTA N°: 88

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE** y **ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **MARIA LUZMILA URREGO OQUENDO** para pronunciarse en virtud del recurso de apelación de **COLFONDOS S.A** y **COLPENSIONES** así como en el grado jurisdiccional de consulta a favor de ésta última entidad, frente a la sentencia con la cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 88** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. LA DEMANDA¹

La DEMANDANTE pretende con este proceso se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado de la demandante entre COLPENSIONES y PORVENIR S.A. y se ordene el traslado de PORVENIR S.A. al Régimen de Prima Media, concretamente a COLPENSIONES, así como al pago de costas, gastos y agencias en derecho y los demás conceptos que ultra y extra petita se logren probar.

En sustento de sus pedimentos afirmó básicamente lo siguiente: **i)** La demandante se encuentra afiliada al RAIS en PORVENIR S.A. desde el 01 de marzo de 2006 y actualmente es empleada activa con la entidad en el AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. **ii)** Nació el 07 de marzo de 1961, estuvo afiliada en el ISS desde el 06 de agosto de 1982 hasta el 28 de febrero de 2006. **ii)** En desconocimiento absoluto de su realidad pensional fue indebidamente asesorada por PORVENIR S.A, efectuando su traslado del régimen prima media el día 01 de Marzo de 2006, lo cual

¹ Carpeta 01PrimeraInstancia/ Archivo 01 / Pág. 1 – 10

le frustró su posibilidad de pensionarse con una mejor oferta a la del RAI en cuanto a la cuantía y monto de su pensión. **iii)** Radicó solicitud de traslado a COLPENSIONES el 08 de mayo de 2019, la cual fue negada en la misma fecha, fundamentada en que faltaban menos de 10 años para el cumplimiento de la edad. **iv)** De haber permanecido en el RPMPD hubiera podido acceder a su pensión de vejez con un monto mínimo del 55% de su IBL, con un promedio salarial de más de \$5.000.000 mensuales, su pensión sería de por lo menos \$2.500.000 a la fecha, mientras que con el RAIS su mesada pensional no alcanzaría ni a la mitad de éste monto a la fecha.

2. CONTESTACIÓN

2.1. COLPENSIONES.²

En la contestación la entidad **se opuso a la prosperidad de las pretensiones** planteando, en síntesis, por carecer de sustento fáctico y legal. Indicando que el traslado que se realizó por parte de la señora MARÍA LUZMILA URREGO OQUENDO, es válido.

Propuso para su defensa las excepciones que denominó: IMPOSIBILIDAD QUE COLPENSIONES DECLARE INEFICACIA DEL TRASLADO, IMPROCEDENCIA DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL TRASLADO, IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE DE COLPENSIONES, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, INNOMINADA O GENÉRICA.

2.2. PORVENIR S.A.

Se destaca por la Sala, que habiéndose ordenado la notificación del auto admisorio con providencia del 30 de septiembre de 2019³, el apoderado de la activa remitió a PORVENIR citación para diligencia de notificación personal el **23 de enero de 2020**⁴. Fue así como la abogada JAQUELINA RODRÍGUEZ ROJAS acreditando la calidad de representante legal judicial de PORVENIR con el Certificado de Existencia y Representación⁵ fue notificada personalmente el **20 de febrero de 2020**⁶, oportunidad en la que expresamente se le indicó sobre el término de 10 días hábiles para contestar la demanda.

Pero PORVENIR se abstuvo de intervenir, aspecto que fue resaltado en la audiencia pública al no existir pruebas por decretar a su favor, sin que se hubiese efectuado manifestación alguna por las partes, por lo que no se advierte irregularidad que afecte el debido proceso de la accionada; entidad que ante requerimiento del A quo aportó simulación pensional de la actora emitida el 2 de mayo de 2023⁷.

3. SENTENCIA⁸

² Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo07 / Pág. 4 -12

³ ARCHIVO 10 – página 8

⁴ ARCHIVO 10 – páginas 4 a 10

⁵ 01PrimerInstancia / Archivo 10 - 11 a 13

⁶ 01PrimerInstancia / Archivo 10 - Pág. 14

⁷ 01PrimerInstancia / Archivo 23

⁸ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo32

En la audiencia del **01 de MARZO de 2023** el **JUEZ TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN** tomó las siguientes decisiones⁹: **i) DECLARÓ** que PORVENIR S.A., no demostró haber cumplido con su obligación de diligencia debida de buen consejo en favor de la señora MARIA LUZMILA URREGO OQUENDO ni que a lo largo de su afiliación el haberle dado información clara, veraz y oportuna con la que se mostrara las circunstancias que le hicieran más favorable permanecer en el RAIS antes que en el RPM. Que causó grave menoscabo, disminución o limitación a la actora, así como la responsabilidad constitucional y profesional en el perjuicio a la seguridad social en pensiones de la demandante. Declaró la inaplicación constitucional (art. 53 C.P. y 272 Ley 100/93) de la pérdida del RPMPD acaecido en cabeza de la señora MARIA LUZMILA URREGO OQUENDO y de acuerdo con ello, que ésta sigue inmersa en el RPMPD, pero a cargo de PORVENIR S.A. **ii) ABSOLVIÓ** a COLPENSIONES de todas las pretensiones incoadas en su contra, sin perjuicio de las órdenes que emite a continuación: **ORDENÓ** a la AFP PORVENIR S.A., que dentro del mes siguiente a la fecha en que la demandante solicite por escrito la pensión de vejez, incluyendo certificado de retiro laboral, solicite a COLPENSIONES elaboración de cálculo actuarial pensional con miras a subrogación pensional. Y a COLPENSIONES que en el mismo lapso de 2 meses presente tal cálculo a PORVENIR S.A quien debe proceder al pago real y efectivo a COLPENSIONES. Que PORVENIR S.A. hasta no haga tal pago sigue obligada a pagar a la señora URREGO OQUENDO la pensión. **AUTORIZÓ** a PORVENIR S.A. a enjugar parte del valor del cálculo tomando las sumas que están en la cuenta de ahorro individual. **iii)** Prospera la excepción propuesta por COLPENSIONES de intransmisibilidad de la responsabilidad de la AFP PORVENIR S.A porque es un tercero en el acto jurídico de traslado y es principio constitucional que los terceros no pueden cargar con las consecuencias dañinas, con las desventajas de la celebración de un acto jurídico en el que no ha participado. Por ello se ABSUELVE a COLPENSIONES de todas las pretensiones, sin perjuicio de las órdenes que le fueron dadas. **iv)** Condenó en costas a AFP PORVENIR S.A.

4. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. PORVENIR S.A.¹⁰

Se solicita la revocatoria de la sentencia, señalando básicamente: **i)** Diversas salas de este Tribunal entre ellas en la que es ponente la Magistrada Maria Patricia Yepes García, se revocan los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito por ejercer facultades extra y ultra perita al ordenar el reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de Porvenir en las mismas condiciones del RPM al tratarse de un aspecto que no fue propuesto en la demanda ni discutido a lo largo de las etapas del proceso violando el art. 29 de la CP en relación con el debido proceso y el derecho a la defensa al extralimitarse en el ejercicio tales facultades; destacando que a señora María Luzmila no cumple con los requisitos para la pensión. **ii)** Tampoco

⁹ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo32 /Min.: 1:30:00

¹⁰ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 32 / Min.: 1:36:10

se puede hablar de que hubiese existido algún tipo de presión sobre la actora al momento del traslado de régimen, pues lo que se le informó en la asesoría corresponde a un beneficio adicional que existe en el Régimen de Prima Media, resaltando que la actora expresó que en el acto de traslado no participaron de modo alguno los asesores de la AFP, por lo que los supuestos que fueron expresados en la demanda, no se corresponden con la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que se realizó el traslado, específicamente sobre la conducta del empleador que no fue llamado a juicio, por lo que no se puede sorprender a las demandadas con condenas impuestas con base en supuestos no relacionados en la demanda. **iii)** Plantea que no se cumplieron los supuestos sobre los cuales se condena a las AFP ni se encuentran acreditados ninguno de los elementos como los perjuicios o el detrimento que sufre la actora, porque la diferencia de la mesada pensional no es prueba ni un elemento contundente para indicar que hubo detrimento, máxime cuando ni siquiera cumple los requisitos para la pensión en el RPM.

4.2. COLPENSIONES¹¹

También se cuestiona la sentencia, solicitando la revocatoria, al expresar en síntesis:

i) Si bien el Juez de instancia indica que COLPENSIONES es un tercero y declara probada la excepción, finalmente se le dan unas órdenes que no son de recibo, señalando además que la demandante contaba con el título de abogada al momento de suscribir el formulario de traslado en el Municipio de la Ceja donde ejercía sus funciones al ser elegida en un cargo popular, por lo que no puede afirmarse que hubiese algún tipo de presión en caso de no haber formado el documento. Resalta que, debido a la profesión de la demandante, conocía que existían otros fondos y que tenía un derecho de libre escogencia de estar o permanecer en alguno de los fondos o elegirlo, señalando que estos formularios sean de COLPENSIONES o de cualquiera de las AFP del RAI, pueden descargarse fácilmente desde cualquier página de internet de las entidades, por lo que es difícil para la entidad conocer o saber quiénes los suscriben y en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar se da la afiliación, por lo que la tesis de que existe coacción no es cierta. **ii)** Existen inconsistencias respecto a los hechos narrados en la demanda porque se habla de una mala asesoría cuando no existió, ningún asesor de la AFP no estuvo presente en el proceso por lo que no se puede hablar de engaño o que se le brindó alguna información a fin de lograr que se trasladara; ni mucho menos que tenía miedo de que COLPENSIONES desapareciera porque tampoco existió tal afirmación por parte de algún asesor. **iii)** Resalta que lo que se evidencia es que la demandante no leyó el formulario que estaba firmando, aun teniendo formación en derecho por lo que sabe sin que pueda ser de recibo que ésta tenga un desconocimiento absoluto sobre los sistemas de pensiones si ha ejercido la asesoría en derecho durante años, máxime si trabajaba en el sector público, resaltando así que la única razón que la impulsa hoy a trasladarse a COLPENSIONES es el valor de la mesada pensional, señalando que la

¹¹ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 32 / Min.: 1:44:00

actora no conoce las ventajas de ninguno de los dos fondos y aun así quiere trasladarse sin conocer las garantías que dará COLPENSIONES. **iv)** Cuestiona la condena a realizar cálculo actuarial y mucho menos lo relativo a la subrogación pensional, resaltando que respecto a la actora, que llama la atención todos los años que han transcurrido y en ningún momento presentó interés por trasladarse de fondo, solo se preocupó por ello cuando conoció por terceros que su mesada sería menor en el fondo en el que estaba. **v)** Si el Tribunal considera que el traslado es pertinente, solicita se haga devolución de los valores que se encuentran dentro de la cuenta de ahorro, los gastos de administración, seguros y cualquier otro tipo de emolumentos que hayan sido descontados, y que estos dineros sean devueltos de manera indexada para que COLPENSIONES no se vea afectada de manera económica.

4.3. DEMANDANTE¹²

El apoderado de la activa tampoco la consecuencia de que sea PORVENIR quien asuma el pago de la prestación, señalando que con el fallo se altera el desarrollo jurisprudencial que lo que propugna es verificar el tema de la indebida asesoría, falta de acompañamiento, al momento de la afiliación y falta de acompañamiento a lo largo de la vida laboral del trabajador y la consecuencia que es que retrotraigan la afiliación. Invoca así el Art 271 de la Ley y la sentencia SL 5686 del 2021, señalando que conforme el precedente la consecuencia de la declaratoria de ineficacia es el traslado al régimen de prima media.

5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia¹³, los apoderados de COLPENSIONES y PORVENIR S.A. decidieron intervenir de la siguiente manera:

La apoderada de **COLPENSIONES** en su argumentación plantea lo siguiente¹⁴: **i) En primer lugar** que **se confirme el fallo de primera Instancia**, señalando: a) Que los Fondos están en una situación probatoria complicada respecto de los esclarecimientos de los hechos que para el presente caso la demandante está en mejor posición de ilustrar, la afiliación por parte de la demandante fue libre voluntaria, espontánea sin coacción alguna firmando el formulario de afiliación que para la fecha era el único documento exigible legalmente para efectos del Traslado de Régimen, por lo que no se le pueden imponer cargas procesales a la AFP que no están obligados a soportar. b) Estos traslados están generando un detrimento al sistema general de pensiones toda vez que los recursos trasladados a Colpensiones por parte de las AFP son insuficientes para sostener una pensión, generando así pánico económico y atentando contra el principio de sostenibilidad financiera. c) Respecto del pronunciamiento de la inaplicabilidad constitucional este no esta teoría no

¹² Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 32 / Min.: 1:54:50

¹³ Numeral 1 del artículo 13 de la ley 2213 de 2022

¹⁴ Carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 13

puede ser admisible toda vez que en ningún momento se le está violentando el derecho fundamental al acceso de la Seguridad en pensiones y el principio de la responsabilidad debe ser compartido dado que el demandante no puede acogerse al posible engaño sufrido, sino por el contrario él está en la obligación legal de acceder a la información respecto cual es el fondo más conveniente para percibir su pensión, sin que se esté vulnerando ningún derecho fundamental (T-184/09 y **T-489 de 2010**). c) Insiste así en que la afiliación al RAIS es completamente válida y por ende a Colpensiones no se le puede imponer recibir nuevamente al afiliado y reconocer una eventual pensión, por lo que tampoco es viable la subrogación pensional, señalando que de acuerdo con la sentencia SL 373 de 2021 se abrió la posibilidad que los fondos privados restablezcan el perjuicio causado a los afiliados. **ii) Sumas a devolver.** En caso de que se declare la ineficacia del traslado y se ordene el regreso nuevamente al régimen de prima media, SE ORDENE A LA AFP PORVENIR S.A. LA DEVOLUCIÓN DE TODOS LOS APORTES REALIZADOS POR EL DEMANDANTE, porcentaje de garantía de pensión mínima, porcentaje de gastos de administración, porcentaje de primas de seguros de invalidez y muerte, rendimientos y ahorros (SL 17595/17, SL 4989/18Y SL1421/19), así como también el cálculo actuarial en el entendido que, si los dineros provenientes de las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A. no alcanzaren a pagar la totalidad de la pensión de vejez, esta última quede con la obligación de balancear estos valores los cuales **deben ser indexados** al momento de su entrega en consideración a la pérdida adquisitiva del valor del dinero.

PORVENIR S.A. a su turno solicita **REVOCAR** en su integridad la sentencia de Primera Instancia para en su lugar **ABSOLVERLA** de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, planteando en síntesis¹⁵: **i) Sobre la declaratoria de ineficacia del traslado:** a) Que en este asunto no se alegó ni probaron los eventos previstos en el artículo 1741 del Código Civil para declarar la nulidad absoluta o siquiera relativa del acto jurídico del traslado, lo que conduce a que este acto goce de plena validez. Tampoco se acreditan los presupuestos del artículo 271 de la Ley 100 de 1993 ni del artículo 897 del Código de Comercio, y agrega que pese a lo diáfano de las normas, “la H. Corte Suprema de Justicia realiza una mixtura para poder resolver las ineficacias de los traslados de régimen pensional” e insiste en que en este asunto **NINGUNO DE ESTOS PRESUPUESTOS LEGALES, SE ALEGARON NI MENOS RESULTARON DEMOSTRADOS EN EL PROCESO**, destacando que el formulario de afiliación suscrito por la parte actora es un documento público que se presume auténtico (arts. 243 y 244 del CGP y parágrafo del art. 54A del CPT, artículo 114 de la Ley 100 de 1993 y artículos 246 y 272 del CGP) . b) **PORVENIR S.A.**, como Administradora de Fondo de Pensión, siempre le **GARANTIZÓ** a la parte demandante la posibilidad de retornar al régimen de prima media. La demandante, luego de recibir la información necesaria y suficiente decidió escoger el régimen de ahorro individual, hecho que se materializó con la suscripción del formulario de afiliación. PORVENIR aportó los documentos que de acuerdo con las normas existentes para el

¹⁵Carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 10

momento en que se celebró el acto jurídico del traslado debía mantener en sus archivos; además, pese a que la parte demandante JAMÁS estuvo en imposibilidad absoluta de retornar al RPMPD, permaneció en el RAIS, lo que sin duda al menos debe valorarse como un indicio serio de querer permanecer en el. c) Cuando se celebró el acto jurídico de vinculación con la demandante, PORVENIR únicamente debía dejar constancia de la libre escogencia a través del formulario de vinculación, sin que, también tuviera la NECESIDAD de registrar en documentos o a través de testigos o cualquier otro medio de prueba que, le SUMINISTRÓ la INFORMACIÓN NECESARIA Y OBJETIVA acerca de las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez a los futuros afiliados. Invoca la sentencia **SL1637-2022**. d) Sin realizar el análisis en conjunto y crítico de las pruebas como lo ordena el artículo 60 del C.P.T y S.S. el juzgador de primera instancia declaró la nulidad y/o ineficacia de traslado de RPM al RAIS efectuada por la AFP, sin consideración a las normas antes referidas del ordenamiento civil relacionadas con la validez de los negocios jurídicos (artículo 1602 del Código Civil). A continuación, plantea la diferencia legal de la ineficacia y nulidad de los actos jurídicos y sus efectos. **ii) Sobre las sumas a devolver:** a) Invoca el artículo 113 literal b) de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1746 del CC así como la sentencia para concluir razonablemente que solo se traslada el valor de los aportes con los rendimientos que se hubieran causado en el RPMPD. b) Invoca los artículos 1746 y 964 del Código Civil, así como sentencia de la Sala de Casación Civil (*sentencia de 16 de septiembre de 2011, expediente No. 19001-3103-003-2005-00058-01*) para señalar que en atención al principio de la congruencia de la sentencia al no haberse discutido y menos probado la mala fe de PORVENIR S.A. en la celebración del acto jurídico de traslado, no puede condenarse a "restituir a favor del afiliado y por ende de un tercero como es COLPENSIONES", los rendimientos financieros que logró por la gestión que adelantó en la administración de los aportes en el RAIS. c) Tampoco se debe ordenar la devolución de las primas de seguros por cuanto el afiliado SIEMPRE estuvo protegido en las contingencias que ellas amparan. Imponer esta obligación es tanto como exigirle a cualquier compañía de seguros que, si no se presenta el siniestro amparado, debe devolver, trasladar, reintegrar el valor de la póliza pagada. d) Y sobre la indexación de las condenas invoca la sentencia C-00161 del 2010 de la que transcribe apartes f de la sentencia SL 9316 del 29 de junio de 2016, así como providencias del Tribunal Superior de Cundinamarca y de Cali.

Y el **apoderado de la activa** reitera en su alegación los mismos planteamientos del recurso¹⁶ resaltando sus reparos frente a la interpretación normativa que el Juez le dio a lo que fue probado suficientemente en el proceso, que fue demostrar que la accionada incumplió su deber de información para con la demandante.

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso en virtud de los recursos de apelación interpuestos por todas las partes, así como en el grado jurisdiccional de

¹⁶Carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 08

CONSULTA a favor de esta última entidad lo que impone efectuar el análisis en el siguiente orden lógico:

En primer lugar, la evolución normativa sobre los DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN MATERIA DE ASESORÍA E INFORMACIÓN CLARA Y VERAZ para tomar la decisión de traslado de régimen inicial al RAIS. En segundo lugar, se analizará en el CASO CONCRETO si debe REVOCARSE la DECISION adoptada en primera instancia y en su lugar DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN de la DEMANDANTE y que esta se encuentra afiliada a COLPENSIONES sin solución de continuidad, y en qué términos debe ser la orden a PROTECCIÓN S.A. en relación con las sumas a trasladar a la administradora del régimen de prima media.

6. LOS DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN RELACIÓN CON EL ACTO JURÍDICO DE AFILIACIÓN O TRASLADO.

Esta Sala de Decisión ha tenido la oportunidad de expresar en varias oportunidades, que la decisión de un afiliado que estaba cotizando en el **I.S.S.** o en las otras Cajas de Previsión Social creadas antes de la Ley 100, **de trasladarse al RAIS**, exigía que la persona tuviese absoluta claridad en relación con su situación pensional, las diferencias entre cada uno de los regímenes, los beneficios e inconvenientes de cada régimen pensional y en especial, **los efectos que en su caso se generan si toma la decisión de trasladarse.**

El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es exigible **desde su creación, y sin hacer distinción alguna**, de acuerdo a lo previsto en el **Decreto 663 de 1993**, aplicable a las AFP desde su origen, en el que se prescribió en el **numeral 1.º del artículo 97**, la obligación de las entidades de *«suministrar a los usuarios de los servicios que prestan **la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen.***

Es así como, conforme a lo previsto en el **artículo 271** en concordancia con el **literal b) del artículo 13 de la Ley 100**, los trabajadores tienen la opción de **elegir** *«libre y voluntariamente»* aquel de los regímenes que mejor le convenga y consulte sus intereses, y por ello, si alguna persona jurídica o natural atenta en cualquier forma contra el derecho de **afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social**, se genera como consecuencia la ineficacia de la afiliación.

En relación con este aspecto, la Sala laboral de la Corte Suprema ha desarrollado un precedente pacífico: **Radicado 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL19447 de 2017, SL 4296 de 2018, SL 1452 de 2019, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, SL4360 de 2019, SL 3199, SL 3202 de 2020, SL 3676 de 2020, SL 081 -2021, SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021** que se apuntala en las siguientes premisas básicas:

- Si bien en los últimos años se ha intensificado la regulación, con lo previsto en la **Ley 1328 de 2009 artículos 3, 5, 7 y 9; Ley 1480 de 2011 artículo 23, Parágrafo 1o. del artículo 2 de la Ley 1748 de 2014,** y el **Decreto 2071 de 2015,** lo cierto es que la obligación de información clara y concreta previa al traslado se encuentra expresa en normas anteriores vigentes para la época en que se efectuó el traslado del demandante, **sin distinguir que tal deber sólo se refiera a los casos de las personas que eran beneficiarias del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100.**
- Para ello baste citar, **el artículo 13 en sus literales b) y k), el 106 y el 114 de la Ley 100,** en concordancia con lo previsto en el **artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y la modificación introducida con la Ley 795 de 2003,** normas en las que se establece que la selección régimen se debe tomar de manera libre, espontánea y sin presiones como requisitos para poder afirmar su eficacia; así como la obligación de las AFP de suministrar a los usuarios la información necesaria para escoger las mejores opciones del mercado y tomar DECISIONES INFORMADAS.
- Siendo, así las cosas, antes del traslado el usuario debe conocer la lógica del RAIS y la esencia de su funcionamiento, sustentado en la capacidad efectiva del ahorro a lo largo de toda la vida para poder garantizar el derecho a una pensión. Y debe tener total claridad acerca de los aspectos relacionados no sólo con el monto y los requisitos de causación, sino la eventual opción de no acceder a ésta prestación. Todos estos aspectos deben ser expresamente informados, para que el usuario pueda efectuar la comparación con las disposiciones que regulan el derecho pensional a los afiliados en el Régimen de Prima Media.
- En fin, significa entonces que la asesoría que debe brindar la Administradora de Pensiones en esa **ETAPA PREVIA Y PREPARATORIA** a la formalización de la información, no sólo debe ser completa y comprensible para el afiliado, sino que trasciende al “DEBER DEL BUEN CONSEJO” en los términos definidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su precedente, deber que en los mismos términos fue acogido en el **artículo 3 del Decreto 2071 de 2015,** pues al mostrar con detalle las diferentes alternativas de la persona tras el análisis de su caso, mostrando los beneficios e inconvenientes de tomar la decisión de traslado, debe incluso ir más allá, para evitar que la persona tome una opción que claramente la perjudica.
- Y en relación con la carga probatoria, es claro que en los términos del **artículo 1604 del Código Civil,** la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y, ello no se agota solo con traer los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada fue suficiente para la persona, lo que no se satisface únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre. Por ello, de acuerdo con lo previsto en los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, no se trata únicamente de

completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición. Y es así como las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

- Finalmente, baste señalar cómo el criterio jurisprudencial orientador para este tipo de casos, fue plasmado en el **Código General del Proceso en el artículo 167**, norma en la que se consagra la posibilidad de distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos que ayuden a esclarecer el objeto del litigio y que en casos como el que hoy ocupa la atención de la Sala, no hay duda que la parte que debe cumplir con esa carga es el Fondo Privado: **a)** Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, con la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le ha entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; **b)** Conoce y tiene los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y que hizo posible que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

Por último, debe la Sala señalar que si bien, el precedente jurisprudencial se encuentra referido a casos de personas que se encontraban afiliadas a una administradora del Régimen de Prima Media y además, beneficiarias del régimen de transición, a quienes les afectó de manera considerable la decisión de traslado de régimen pensional; sin embargo, resulta evidente que la *Ratio Decidendi* de esas providencias resulta plenamente aplicable, a quienes eligieron el Régimen de Ahorro Individual por Primera Vez, porque lo relevante está, en que efectivamente se acredite dentro del proceso por la Administradora de Pensiones, que sí suministró la INFORMACION CLARA, COMPLETA, SUFICIENTE, en términos de transparencia y eficiencia.

7. EL CASO CONCRETO

Para efectuar el análisis se debe partir de las siguientes premisas no discutidas: **i) MARIA LUZMILA URREGO OQUENDO** nació el **07 de marzo de 1961** por lo que en este momento cuenta con **62 años**¹⁷. **ii)** Se afilió inicialmente al **I.S.S.** el **06 de agosto**

¹⁷ Carpeta 01PrimerInstancia/ Archivo 03 / Pág. 1

de 1982 donde cotizó **112.57 semanas** hasta el **28 de febrero de 2006**¹⁸. iii) Se trasladó del REGIMEN DE PRIMA MEDIA al de AHORRO INDIVIDUAL administrado por **PORVENIR S.A.** donde inició cotizaciones en **febrero de 2006** – en ese entonces trabajaba en MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA¹⁹.

Las demandadas han afirmado a lo largo del proceso que la SELECCIÓN DE RÉGIMEN se tomó de **forma libre, espontánea y sin presiones** en los términos del formulario de afiliación suscrito por la actora, pero en criterio de la Sala, leyendas de este tipo no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, **acreditan un consentimiento, pero no informado**. En efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha precisado de forma reiterada que la suscripción de aquel documento, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como “la afiliación se hace libre y voluntaria”, “se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones” u otro tipo de leyendas de esta clase, son insuficientes para dar por demostrado dicho deber (**CSJ: SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, reiterada en SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020**).

Pues bien, según lo acreditado en el proceso, resulta evidente que para la fecha en la que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para **MARIA LUZMILA URREGO OQUENDO**, esta tenía menos de **35 años** de edad y **de 15 años de servicio**. Pero de acuerdo con el análisis efectuado en el **acápito sexto** de esta providencia y con el precedente jurisprudencial sobre la materia, los promotores de la AFP ante la suscripción del formulario de traslado, **independiente de si la demandante era beneficiaria o no del régimen de transición**, tenía no solo el **DEBER** sino la **OBLIGACIÓN** de brindarle una **asesoría personalizada**, analizando **las circunstancias particulares**, y **mostrando aspectos concretos de su situación pensional**.

Como para la época en que suscribió el formulario no había entrado en vigencia la Ley 797, se le debió explicar que si permanecía en el I.S.S., el derecho a la pensión de vejez se causaría al arribar a los 55 años de edad y acreditando 1.000 semanas cotizadas, para pensionarse con una mesada cuyo valor podría ser con una tasa del 85 % en caso de cotizar 1400 semanas, sobre un IBL integrado en los términos del artículo 21 de la Ley 100.

Y se le debió indicar además, que si se trasladaba para el RAIS, las condiciones pensionales serían las siguientes: **i)** Se podría pensionar antes de los 57 años, sin embargo tal circunstancia estaba sujeta a una condición y es que tuviera el capital suficiente para poder optar al menos por una pensión mínima (**artículo 64 Ley 100**). **ii)** Como la demandante tenía cotizaciones en el REGIMEN DE PRIMA MEDIA, debía

¹⁸ Carpeta 01PrimerInstancia/ Archivo 03 / Pág. 2

¹⁹ Carpeta 01PrimerInstancia/ Archivo 03 / Pág. 8

saber que las cotizaciones que habían efectuado en el I.S.S. se verían representadas en un bono pensional tipo A que sólo **se redime en el caso de las MUJERES a los 60 años**, de manera que, si se daban las condiciones para pensionarse anticipadamente, habría que negociar el bono en el mercado financiero, disminuyendo su valor, lo que tendría efecto en el valor de la mesada, en la medida en que disminuiría el valor del capital para financiar la prestación. **iii)** Frente al valor de la pensión en el RAIS, se debió explicar que ésta depende del capital consignado en la cuenta individual y según la modalidad pensional elegida (**artículos 79 a 82 de la Ley 100**), y que el valor que se abonaría a la cuenta individual no sería equivalente al 100% de la cotización, porque una parte se destinaría a pagar la prima mensual de la compañía de seguros, a gastos de administración y al fondo de solidaridad del RAIS. **iv)** Y en relación con la ausencia de beneficiarios en materia de pensión de sobrevivientes y la posibilidad de que los dineros de la cuenta de ahorro individual se destinen a la masa hereditaria, se debió precisar que **ello no ocurre si la muerte se presenta siendo pensionado bajo la modalidad de renta vitalicia**. **v)** También se debía indicar, que en caso de que no completara el capital suficiente para obtener una pensión mínima (equivalente al 110% del salario mínimo a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones actualizado con el IPC), entonces **debían seguir cotizando hasta obtener 1.150 semanas y cumplir 57 años**, para poder acceder a la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, mostrando que esos dos requisitos eran superiores a los consagrados en el I.S.S. **vi)** Y que la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, es un beneficio que no se presenta en todos los casos porque está sujeto a unas condiciones y explicarle cuáles (**artículo 84 de la Ley 100, vigente para la época**), para que tuviese claro que, si no cumplía con ello, no obtendría pensión de vejez y por ello, la entidad le devolvería los saldos que estuvieran en su cuenta individual, con el efecto que eso genera en relación con la afiliación en salud.

Así, no comparte la Sala los planteamientos esbozados en la providencia que se revisa:

En **primer lugar**, se observa con claridad que en el proceso no se acreditó por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES el haber suministrado esta información clara, completa y detallada a la actora antes de suscribir el formulario de traslado de régimen. La Jurisprudencia nacional ha reiterado, entre otras, en la sentencia CSJ SL1452-2019, reiterada en decisiones CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4806-2020 y CSJ SL4062-2021, que a la administradora de pensiones le corresponde acreditar en juicio el cumplimiento de ese deber de información.

En segundo término, en el proceso no se efectuó confesión alguna en contra por la señora **MARIA LUZMILA URREGO OQUENDO**, quien clarifica en el interrogatorio de parte la ausencia absoluta de asesoría previa a la suscripción del formulario de

traslado. Las entidades en el recurso hacen referencia a la **semejanza en el monto de la pensión de vejez en cada régimen** y que no se acreditó el perjuicio económico, aspecto sobre el que la Alta Corporación también se ha pronunciado, en sentencias como la **SL 5686 – 2021** en la que indicó:

Recuérdese que el análisis judicial sobre el cumplimiento del deber de información a cargo de los fondos privados está al margen, en principio, de la situación pensional de la persona, por lo que no sería coherente exigir que se acredite que el traslado causó una lesión injustificada que impidió el acceso a un derecho pensional en abstracto, a menos que el litigio se dirija justamente a acreditar un perjuicio como pretensión complementaria, sin que esto incide en la declaratoria de ineficacia de traslado.

Y es que en un estadio de afiliación activa al sistema y más aún cuando el derecho pensional aún está en formación, los jueces no pueden elucidar en abstracto sobre la conveniencia de estar o permanecer en uno u otro régimen y los perjuicios que ello eventualmente acarrearía, pues cada uno de los modelos consignan características que pueden ser convenientes tanto para el afiliado como a sus eventuales beneficiarios en determinada situación particular.

A raíz de ello, la jurisprudencia de la Corte ha garantizado el *derecho básico* de los trabajadores a *recibir información necesaria, objetiva y transparente durante el proceso de traslado de régimen pensional*, como una garantía mínima consagrada en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que encuentra respaldo en el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 y se armoniza con artículo el 13 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra que cualquier estipulación que afecte o desconozca los derechos mínimos «no produce efecto» (CSJ SL3871-2021), de modo que incumplida esa prerrogativa, es imperativo declarar la ineficacia del traslado.

En consecuencia, conforme lo previsto en el **artículo 271** de la Ley 100 de 1993 y el reiterado y pacífico precedente judicial sobre la materia analizado en esta providencia ha de **REVOCARSE** la decisión que se revisa para en su lugar, **DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN** en el caso de la señora **MARIA LUZMILA URREGO OQUENDO**, por lo que **continúa afiliada sin solución de continuidad en el régimen de prima media con prestación definida**. En adición, debe destacarse que no fue objeto de pretensión en la demanda el reconocimiento de la pensión de vejez, de manera que la decisión adoptada no solo vulnera los principios de congruencia y debido proceso, sino que supera las facultades consagradas en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo²⁰ al ordenar el pago de la prestación a cargo de COLFONDOS y luego de COLPENSIONES trasgrediendo el precedente unificado de la Sala de Casación Laboral para este tipo de procesos.

Ahora, en lo referente a la **profesión de la actora como abogada**, aspecto en el que hacen énfasis las apoderadas de las entidades en su recurso, y como se estableció en la sentencia **CSJ SL3349-2021**, el incumplimiento del deber en referencia, ni siquiera se sana con: i) la «*desidia del interesado en indagar por las condiciones y características*» de ambos sistemas prestacionales a efectos de adoptar una decisión

²⁰ **ARTICULO 50. EXTRA Y ULTRA PETITA.** <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El Juez ~~de primera instancia~~ podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas. (Artículo declarado EXEQUIBLE, excepto el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia **C-662-98**)

ilustrada o ii) la profesión y condiciones de adiestramiento del afiliado, concluyendo que, en ningún evento es posible la subsanación de un acto jurídico que, por imperativo legal, no puede producir efectos.

COLPENSIONES en la contestación propuso la EXCEPCION de PRESCRIPCION, pero en el contexto que se ha venido analizando, debe señalarse que estamos en presencia de la ineficacia del traslado: Y una de las características esenciales de la inexistencia, es que es insubsanable por la prescripción. No adquiere vida por el transcurso del tiempo, por lo tanto, en cualquier tiempo puede ser alegada su inexistencia. En la sentencia SL 1421 de 2019, la Sala Laboral de la Corte explicó con claridad sobre la inoperancia del medio exceptivo, no solo por su conexidad con un derecho fundamental e irrenunciable, sino porque el sustento fáctico del proceso da lugar a consolidar el status de pensionado, y, en consecuencia, propiciar la posibilidad del disfrute de un derecho económico no susceptible de extinción por el transcurso del tiempo.

Finalmente, **en relación con las sumas de dinero que se deben devolver**, debe señalarse lo siguiente: **i)** En la medida en que el legislador no previó un camino específico para declarar la ineficacia distinto al de la nulidad, la Sala Laboral de la CSJ en sentencias **SL1688, 3464 y SL 4360 de 2019**, así como en la **SL 2877 y SL 4811 de 2020** ha explicado que las consecuencias prácticas de la primera declaración son idénticas a la de la segunda (vuelta al *statu quo ante*). **ii)** Y como el precepto que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades es el **artículo 1746 del Código Civil** y este por analogía es aplicable a la ineficacia, según esta disposición, declarada la ineficacia, las partes, *en lo posible*, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación. **iii)** O, dicho de otro modo, el propósito es retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el acto no hubiera existido jamás, es decir con ineficacia *ex tunc* (desde siempre). De no ser posible, es decir, cuando la vuelta al ***statu quo ante*** no sea una salida razonable o plausible, el juez del trabajo debe buscar otras soluciones que resarzan o compensen de manera satisfactoria el perjuicio ocasionado al afiliado, con ocasión de un cambio injusto de régimen. **iv)** Y en la medida que la ineficacia del acto de cambio de régimen pensional supone **negarle efecto al traslado**, tal situación solo es posible bajo la **ficción de que el mismo nunca ocurrió**. Luego, si una persona estaba afiliada al régimen de prima media con prestación definida, ha de entenderse que **nunca se cambió al sistema privado de pensiones**, y si estuvo afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad, ha de darse por sentado que **nunca se trasladó al sistema público administrado por COLPENSIONES**. **v)** Por esto mismo, en tratándose de *afiliados*, la Sala ha adoctrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a COLPENSIONES **la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros**. Así mismo, ha dicho que esta declaración **obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de**

administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES. vi) Así, reconoce esta corporación que si bien existió una administración por parte de las AFP, además del pago de seguros, producto de la declaratoria de ineficacia todos los recursos deben trasladarse a aquella administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, teniendo presente que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional, se cubren las prestaciones causadas. Por ello, **PORVENIR S.A** efectuara la devolución en relación con los períodos en que estuvo afiliada la demandante. **vii)** Se destaca que ninguna de las devoluciones acá ordenadas se ve afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción, excepción propuesta por las accionadas, la que a voces de la Sala de Casación Laboral de la CSJ no opera en estos litigios, dado el carácter irrenunciable del derecho pensional, que se extiende a la acción para reclamar su conformación con todos los aspectos conexos que le son inherentes, al respecto las sentencias **CSJ SL1688-2019; CSJ SL12715-2014; CSJ SL 28479, 4 jun. 2008, CSJ SL 39347 y CSJ SL 8397, 5 jul. 1996. ix)** Finalmente, para garantizar la SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA esta Sala de Decisión ordenaba que el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente definido por la Corte Constitucional en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 DE 2010 y SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM. Pero reexaminando el asunto, y a partir del precedente vertido por la Sala de Casación Laboral en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021**, considera que lo procedente para tal fin es ordenar **la devolución de tales sumas debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos**, tal y como lo solicitó la apoderada de COLPENSIONES en el recurso de apelación. Al momento de cumplirse los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Sobre las **COSTAS**, debe indicarse lo siguiente: **i)** En primera instancia sólo se CONDENÓ en COSTAS a **PORVENIR S.A.** decisión que no fue cuestionada de manera concreta por esta entidad **ni por la demandante. ii)** Y al prosperar los recursos de apelación, en esta instancia no se causaron costas. (**artículo 365 CGP numerales 1 y 3**)

8. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE:**

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín para en su lugar proferir las siguientes DECLARACIONES y CONDENAS:

- **DECLARAR** la ineficacia del traslado efectuado por la señora **MARIA LUZMILA URREGO OQUENDO** identificada con c.c. 39.182.196 al REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD a través de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. por los motivos expuestos. En consecuencia, **DECLARAR** que para todos los efectos legales la afiliada nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y, por tanto, siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida.
- **CONDENAR** a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS **PORVENIR S.A.** a trasladar a COLPENSIONES, dentro de los **30 días siguientes** a la ejecutoria de esta providencia, **la totalidad del capital ahorrado, junto los rendimientos financieros.** Y se **CONDENA** a **PORVENIR S.A.** a **devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, incluyendo así: CUOTAS DE ADMINISTRACION, PRIMAS PARA SEGURO PREVISIONAL y las SUMAS DESCONTADAS PARA GARANTIA DE PENSION MINIMA** debidamente indexadas. Al momento de cumplirse esta orden los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, conforme lo explicado en la parte motiva de esta sentencia.
- **ORDENAR** a COLPENSIONES activar la afiliación de la señora **MARIA LUZMILA URREGO OQUENDO** al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad, recibir las sumas ordenadas en esta providencia y actualizar la historia laboral del demandante incluyendo los períodos que fueron cotizados en el RAIS.

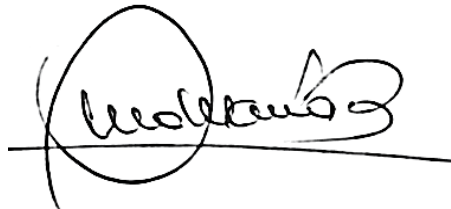
SEGUNDO: DECLARAR improbadas las excepciones de mérito formuladas por las demandadas.

TERCERO: En esta instancia no se causaron costas.

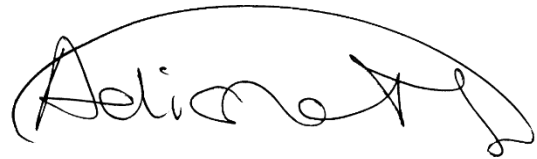
Se ordena la notificación mediante EDICTO y vencido el término se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Las Magistradas,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana María Zapata Pérez', written over a horizontal line.

ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriana Catherina Mojica Muñoz', written in a cursive style.

LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE

SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA

ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ